

Diario de Centro América

ÓRGANO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, C. A.

JUEVES 19 de NOVIEMBRE de 2020 No. 2 Tomo CCCXVI

Director General: Pavel Arellano Arellano

www.dca.gob.gt

EN ESTA EDICIÓN ENCONTRARÁ:

ORGANISMO LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
DECRETO NÚMERO 30-2020

Página 1

ORGANISMO EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
ACUERDO MINISTERIAL No. 261-2020

Página 3

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 186-2020

Página 4

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 213-2020

Página 5

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 262-2020

Página 5

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 286-2020

Página 6

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 307-2020

Página 6

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 333-2020

Página 6

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 345-2020

Página 7

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 347-2020

Página 7

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 357-2020

Página 7

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 370-2020

Página 8

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 379-2020

Página 8

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 392-2020

Página 9

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
ACUERDO GUBERNATIVO No. 185-2020

Página 9

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
ACUERDO MINISTERIAL No. 1534-2020

Página 10

PUBLICACIONES VARIAS

MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA
ACUERDO No. COM-39-2020

Página 11

MUNICIPALIDAD DE VILLA CAÑALES,
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
ACTA NÚMERO 54-2020 PUNTO DÉCIMO

Página 12

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ MULUÁ,
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
ACTA NÚMERO 49-2020 PUNTO DÉCIMO

Página 12

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS ALZATATE,
DEPARTAMENTO DE JALAPA
ACTA NÚMERO 35-2020 PUNTO: OCTAVO

Página 12

ANUNCIOS VARIOS

- Matrimonios
- Títulos Supletorios
- Edictos
- Remates
- Convocatorias

Página 14
Página 14
Página 14
Página 16
Página 17

ORGANISMO LEGISLATIVO



CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

DECRETO NÚMERO 30-2020

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que es obligación del Estado y sus autoridades mantener a los habitantes de la Nación en el pleno goce de los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza, en casos de estado de calamidad pública puede cesar la plena vigencia de algunos derechos, previa declaratoria del presidente de la República en Consejo de Ministros, calificando la situación particular según su naturaleza y gravedad, de conformidad con el Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente, Ley de Orden Público.

CONSIDERANDO:

Que la depresión tropical ETA provocó constantes lluvias, ocasionando desoladoras repercusiones en las distintas zonas del país, lo que ha puesto innumerables vidas humanas en peligro, deslizamientos de tierra, desbordamiento de ríos e inundaciones, pérdida de infraestructura vial, daño en las redes de comunicación y ha causado cuantiosos daños materiales que afectan al país y que constituyen un riesgo inminente para las poblaciones más vulnerables.

CONSIDERANDO:

Que el presidente de la República en Consejo de Ministros, con fecha 5 de noviembre de 2020, emitió el Decreto Gubernativo Número 20-2020 que declara el estado de calamidad pública, por un plazo de treinta días a partir de la vigencia del Decreto Gubernativo en mención, en los departamentos de Petén, Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Chiquimula, Zacapa, Jutiapa, El Progreso y Santa Rosa.

CONSIDERANDO:

Que el presidente de la República en Consejo de Ministros, con fecha 6 de noviembre de 2020, emitió el Decreto Gubernativo Número 21-2020 que declara el estado de calamidad pública, por un plazo de treinta días a partir de la vigencia del Decreto Gubernativo en mención, en el departamento de Huehuetenango.

CONSIDERANDO:

Que al Congreso de la República le corresponde ratificar los Decretos Gubernativos Números 20-2020 y 21-2020, emitidos por el presidente de la República en Consejo de Ministros, emitiendo el instrumento legal que en derecho corresponde.

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 138, 139 y 171 literal a) de la Constitución Política de la República de Guatemala,

DECRETA:

Artículo 1. Ratificar el Decreto Gubernativo Número 20-2020, que declara estado de calamidad pública, por un plazo de treinta días a partir de la vigencia del Decreto Gubernativo Número 20-2020, en los departamentos de Petén, Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Chiquimula, Zacapa, Jutiapa, El Progreso y Santa Rosa.

Artículo 2. Ratificar el Decreto Gubernativo Número 21-2020, que declara estado de calamidad pública, por un plazo de treinta días a partir de la vigencia del Decreto Gubernativo Número 21-2020, en el departamento de Huehuetenango.

Artículo 3. Se reforma el artículo 9 del Decreto Gubernativo Número 20-2020, emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros, para que quede redactado de la forma siguiente:

“Artículo 9. Adquisiciones públicas durante el estado de calamidad pública. Se autoriza la compra o contratación de bienes, suministros y servicios, necesarios para atender el estado de calamidad pública, así como la contratación de los trabajos para la reparación de daños materiales en la infraestructura y redes de comunicación relacionados con el objeto del presente Decreto Gubernativo. Para el efecto, estas adquisiciones se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 44 literal a) y 45 del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado; y 30 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo Número 122-2016.

Las compras o contrataciones referidas en el párrafo anterior que realicen las diferentes unidades ejecutoras de las entidades reguladas en el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado, deberán cumplir con parámetros de transparencia y probidad.

Las convocatorias para la recepción de ofertas electrónicas deberán publicarse en el sistema GUATECOMPRAS dentro de la vigencia del estado de calamidad pública.”

Artículo 4. Se reforma el artículo 9 del Decreto Gubernativo Número 21-2020, emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros, para que quede redactado de la forma siguiente:

“Artículo 9. Adquisiciones públicas durante el estado de calamidad pública. Se autoriza la compra o contratación de bienes, suministros y servicios, necesarios para atender el estado de calamidad pública, así como la contratación de los trabajos para la reparación de daños materiales en la infraestructura y redes de comunicación relacionados con el objeto del presente Decreto Gubernativo. Para el efecto, estas adquisiciones se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 44 literal a) y 45 del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado; y 30 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo Número 122-2016.

Las compras o contrataciones referidas en el párrafo anterior que realicen las diferentes unidades ejecutoras de las entidades reguladas en el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado, deberán cumplir con parámetros de transparencia y probidad.

Las convocatorias para la recepción de ofertas electrónicas deberán publicarse en el sistema GUATECOMPRAS dentro de la vigencia del estado de calamidad pública.”

Artículo 5. Se faculta al Ministerio de Economía, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social para que ejecuten durante el presente ejercicio fiscal, los recursos asignados al Fondo para la Protección del Empleo que no se hubieren ejecutado a la conclusión del estado de calamidad pública, declarado por el coronavirus COVID-19.

Artículo 6. Transparencia en la adquisición y contratación de bienes y servicios. La aplicación del artículo 9 del Decreto Gubernativo Número 20-2020 y del artículo 9 del Decreto Gubernativo Número 21-2020, se registrará conforme el contenido del presente artículo.

Se autoriza la compra de bienes y suministros, así como la contratación de servicios que se encuentren relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Decreto, observando lo dispuesto en las literales a) y b) del artículo 44 y 45 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, para la obtención de los fines del presente Decreto y en la eventualidad de ser superadas las capacidades técnicas y operativas de las instituciones encargadas, lo cual se realizará bajo la responsabilidad de las autoridades superiores de las distintas dependencias del Estado y observando parámetros de transparencia y publicidad de las acciones referidas.

Lo actuado y la documentación de respaldo en los procesos de compra y contratación de bienes, suministros y servicios, así como las contrataciones para la ejecución y supervisión de trabajos que se realicen bajo el estado de calamidad pública, relacionado con el cumplimiento del objeto del presente Decreto Gubernativo, deberá publicarse en el sistema GUATECOMPRAS, dentro de los diez días calendario siguientes a la fecha de contratación o adquisición.

Para el efecto, el Ministerio de Finanzas Públicas deberá girar las instrucciones respectivas a las unidades ejecutoras para que, dentro del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), se establezca un programa presupuestario denominado “EMERGENCIA ETA 2020”, en el que se registre el gasto relacionado con la atención al estado de calamidad pública decretado.

Queda prohibida la contratación o adquisición de bienes y servicios por medio de organizaciones no gubernamentales e intermediarios.

Artículo 7. Atención a daños ocasionados en sitios arqueológicos. Derivado de la emergencia ETA y sus consecuencias adversas y daños a sitios arqueológicos, se hace una asignación presupuestaria de Q.2,000,000.00 provenientes de los fondos de emergencia destinados a la atención de desastres. Dicha asignación será administrada por el Ministerio de Cultura y Deportes, quien podrá ejecutarla única y exclusivamente para reparación, remozamiento y/o atención a sitios arqueológicos dañados en los departamentos correspondientes al estado de calamidad, dándole prioridad al Sitio Arqueológico Quiriguá.

Artículo 8. Colaboración institucional. El Registro Nacional de las Personas, deberá prestar su colaboración al Ministerio de Desarrollo Social, a las gubernaciones departamentales, a los Centros de Operaciones de Emergencia Municipales -COEM- y a los Consejos Comunitarios de Desarrollo de cada jurisdicción, con el objeto que aquellas personas que no cuenten con su Documento Personal de Identificación puedan contar con el mismo.

Para tal efecto, en un plazo no mayor de quince días calendario a partir de la vigencia del presente Decreto, el Registro Nacional de las Personas en coordinación con las entidades descritas anteriormente, participará en la construcción del padrón de población damnificada. Asimismo, el Registro Nacional de las Personas, a requerimiento de las personas que residan en los municipios y departamentos comprendidos en el estado de calamidad pública y que lo hayan extraviado por ese fenómeno natural, les extenderá de manera gratuita el Documento Personal de Identificación.

En el caso de aquellas personas que nunca hayan contado con Documento Personal de Identificación, podrán solicitar su respectiva identificación, para lo cual contarán con un plazo no mayor de treinta días contados a partir de la vigencia del presente Decreto.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el presente artículo, se amplía el presupuesto por diez millones de Quetzales (Q.10,000,000.00) al Registro Nacional de las Personas, los cuales se financiarán con disminución presupuestaria al Ministerio de Economía de los fondos aprobados para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Artículo 9. Se exonera el pago del Impuesto al Valor Agregado -IVA-, y los derechos arancelarios a las importaciones de equipos, donaciones, bienes, insumos y suministros, que en concepto de ayudas y donaciones, se reciban para programas de beneficio social o de emergencias en calamidades públicas a favor de los Clubes Rotarios de Guatemala, previa autorización de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, por un plazo de cinco (5) años a partir de la vigencia del presente Decreto.

Queda terminantemente prohibida la comercialización de los bienes y la utilización de la presente exoneración para importar bienes que no sean exclusivos para los programas de beneficio social de los Clubes Rotarios de Guatemala.

La correcta utilización del beneficio fiscal establecido en el presente artículo será objeto de fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas y el correspondiente control por la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, según corresponda.

Artículo 10. Se faculta y autoriza al Organismo Ejecutivo para que, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, se realicen las operaciones financieras y contables que corresponda para reprogramar los fondos no ejecutados a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto, de los cincuenta millones de Quetzales (Q.50,000,000.00) asignados al Programa de Agricultura Campesina del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, en el artículo 15 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República, a efecto que dichos fondos sean utilizados para atender a las personas afectadas por la depresión tropical ETA, en los departamentos en donde se requiera infraestructura para los sistemas de riego.

Artículo 11. Rendición de cuentas al Congreso de la República. Al finalizar el estado de calamidad pública provocado por la depresión tropical ETA que ha producido inundaciones y deslaves en el territorio nacional y en algunos lugares con mayor gravedad, con efectos en la población y sus bienes, el Organismo Ejecutivo por medio del Ministerio de Finanzas Públicas tiene que entregar, de manera escrita y digital, a la Junta Directiva del Congreso de la República para que este lo traslade a todos los diputados un informe circunstanciado sobre lo siguiente:

1. Información sobre los gastos incurridos por cada unidad ejecutora involucrada en atender la emergencia y los efectos de la depresión tropical ETA, incluyendo: unidad ejecutora, tipo de gasto, procedimiento utilizado, partida de gasto, fuente de financiamiento, lugar en que se ejecutó el gasto, beneficiarios atendidos.
2. Ejecución de todos los recursos financieros ordinarios y extraordinarios aprobados para atender esta emergencia provocada por la depresión tropical ETA.
3. Contratos suscritos para atender las necesidades provocadas por la depresión tropical ETA en cada unidad ejecutora con recursos humanos profesionales y técnicos, así como el pago por esos servicios prestados.
4. Inventario de donaciones privadas, nacionales y extranjeras recibidas, su ejecución e ingreso a inventarios de la CONRED y de las unidades ejecutoras responsables de la entrega final a los beneficiarios.

Artículo 12. Fondo emergente. Se autoriza al Organismo Ejecutivo a realizar los reajustes presupuestarios necesarios para el ejercicio fiscal dos mil veinte, para que dentro de las Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, se transfiera para su ejecución, hasta un monto de cuatrocientos millones de Quetzales, los cuales serán asignados para conformar el fondo emergente que permita mitigar los daños que puedan ocasionar los fenómenos naturales que afecten al país, cuya ejecución deberá registrarse al momento de declararse los casos previstos en el Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente, Ley de Orden Público.


Si durante el ejercicio fiscal no se requiriera la utilización de dichos recursos, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que, en función a la disponibilidad financiera, estos se transfieran contablemente a la cuenta de depósitos monetarios de Tesorería Nacional correspondiente al “fondo emergente”.

Los recursos se pueden utilizar en cualquier caso de los previstos en el Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente, Ley de Orden Público, siempre que exista disponibilidad de recursos; y al obtenerse recursos por la activación de seguros paramétricos.

Artículo 13. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.


ALLAN ESTUARDO RODRÍGUEZ REYES
PRESIDENTE




DOUGLAS RIVERO MÉRIDA
SECRETARIO


CARLOS SANTIAGO NÁJERA SAGASTUME
SECRETARIO

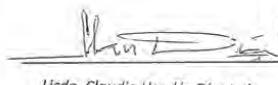
PALACIO NACIONAL: Guatemala, dieciocho de noviembre del año dos mil veinte.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE




GIAMMATTEI FALLA




Licda. Claudia Haydée Díaz León
Tercera Viceministra
Ministerio de Gobernación
Encargada del Despacho


Licda. Loyda Susana Lemus Arriaga
SECRETARIA GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

[E-1057-2020]-19-noviembre

ORGANISMO EJECUTIVO



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

ACUERDO MINISTERIAL No. 261-2020

Guatemala, 17 de noviembre de 2020

LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de la República establece la obligación del Estado de velar por la salud y la asistencia social de todos los habitantes, desarrollando a través de sus instituciones, acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, coordinación y las complementarias pertinentes a fin de procurarles el más completo bienestar físico, mental y social.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo que establece el Artículo 3 y 9 del Código de Salud, corresponde al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social la rectoría del Sector Salud, entendida ésta como la conducción, regulación, vigilancia, coordinación y evaluación de las acciones e instituciones de salud a nivel nacional, asimismo la función de formular, organizar y dirigir la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos para la entrega de servicios de salud a la población, y para cumplir con las funciones anteriores, tiene las más amplias facultades para ejercer todos los actos y dictar todas las medidas que conforme a las leyes, reglamentos y demás disposiciones del servicio, competen al ejercicio de su función; y que además en caso de epidemia, conjuntamente con las demás instituciones del Sector y otros sectores involucrados, deberá emitir las normas y procedimientos para proteger a la población; y, que el artículo 58 señala que en caso de epidemia o riesgo socio ambiental, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social deberá emitir las normas y procedimientos necesarios para proteger la salud de la población, en conjunto con las demás instituciones del Sector y otros sectores involucrados.

CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo Gubernativo 150-2020, el Presidente de la República en Consejo de Ministros emitió las Disposiciones Reglamentarias y Reformas para Garantizar la Salud Pública derivado de la Pandemia Covid-19 y declarando la continuidad de la emergencia grave como consecuencia de la epidemia COVID-19 generada por el virus SARS-CoV-2, estableciendo el sistema de alerta sanitaria para el monitoreo de la epidemia, el cual ha sido debidamente aprobado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social como el instrumento que mediante la medición periódica de indicadores de la incidencia de la enfermedad, la intensidad del contagio, la tendencia de la epidemia y el uso y disponibilidad de pruebas diagnósticas que permite determinar el nivel de riesgo existente para la población; así también manda que todos los habitantes de la República deben asumir su máxima responsabilidad y colaboración en el cumplimiento de las medidas sanitarias y de salud pública para evitar el contagio de la enfermedad por Covid-19, por lo que es pertinente dictar la presente disposición legal.

POR TANTO:

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 194 literales a) y f) de la Constitución Política de la República de Guatemala; y con fundamento en los artículos 27 incisos a), f) y m) del Decreto número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo; 3, 4, 9 literal a) y 58 del Decreto número 90-97 del Congreso de la República de Guatemala, Código de Salud.

ACUERDA

Emitir las siguientes:

Normas Sanitarias para la Congregación Segura de Grupos de Personas durante la Epidemia de SARS-CoV-2 (COVID-19)

ARTICULO 1. Objeto: La presente normativa tiene por objeto establecer la regulación mínima en materia sanitaria que deberá cumplirse para la congregación segura de grupos de personas en reuniones sociales o de cualquier otro tipo, entre las que se incluyen juntas o asambleas de toda naturaleza, sin que esta enumeración sea limitativa, durante la epidemia de SARS-CoV-2 (COVID-19) en el territorio nacional, y es de observancia general para todos los habitantes de la República, sean personas individuales o jurídicas.

ARTICULO 2. Protocolos Sanitarios. Las personas o grupos de personas, particulares o personas jurídicas en general deberán contar con protocolos sanitarios específicos para detectar personas que tengan síntomas de infección respiratoria o sospechosa para COVID-19 y que se presenten a las reuniones que se convoque y celebren, con el objeto de evitar el contagio y propagación de la enfermedad.

Las personas que se presenten y tengan síntomas de infección respiratoria o sospechosa para Covid-19, no podrán acceder de forma presencial a las reuniones convocadas o invitadas; tampoco podrán acceder aquellas personas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad en los pasados diez (10) días y que no hayan finalizado el periodo de aislamiento requerido por la autoridad sanitaria, o las que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliar por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.

El sistema de vigilancia sanitario contenido en el protocolo específico relacionado deberá permitir el rastreo y monitoreo de contactos de casos confirmados de COVID-19.

ARTICULO 3. Medidas Obligatorias. Son medidas sanitarias obligatorias las establecidas en el artículo 2 del Acuerdo Ministerial Número 229-2020 emitido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y artículo 3 del Acuerdo Gubernativo Número 150-2020, siendo éstas: a) Uso universal y adecuado de mascarilla, salvo las personas que por su condición médica tengan una contraindicación médica debidamente comprobada; b) Distanciamiento físico de por lo menos un metro con cincuenta centímetros; c) Higiene de manos con agua y jabón, o en su defecto, con alcohol en gel con una concentración mínima de sesenta por ciento.

ARTICULO 4. Ventilación. Se recomienda intensificar la ventilación natural de todos los espacios en los que se celebren cualquier tipo de reuniones de personas, debiendo mantener las ventanas abiertas todo el tiempo que sea posible.

ARTICULO 5. Las personas que convoquen o inviten a las reuniones sociales o de cualquier otro tipo, indicadas en el artículo 1, serán responsables del cumplimiento de las medidas sanitarias de carácter epidemiológico, y de la referencia de su observancia en el acta o instrumento legal que documente la celebración de ésta.

ARTICULO 6. Aforos y Clasificación de Riesgo en Reuniones de cualquier índole. En la realización de reuniones a las que se convoque o invite a grupos de personas, los responsables de éstas deberán determinar el espacio físico en el que se celebrarán las reuniones sociales o de cualquier otro tipo indicadas en el artículo 1, y que permita mantener el aforo determinado para eventos en el Tablero de Alertas Sanitarias normado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Así mismo, los órganos de dirección de éstas, y las personas que conduzcan las asambleas, juntas, reuniones o actividades deberán establecer el nivel de riesgo basado en las definiciones siguientes, y hacerlo del conocimiento de los participantes junto con la convocatoria: